

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Valencia**

Sección: **2**

Fecha: **25/06/2025**

Nº de Recurso: **923/2025**

Tipo de Resolución: **Auto**

## **AUDIENCIA PROVINCIAL**

### **SECCIÓN SEGUNDA**

#### **VALENCIA**

Avenida DEL SALER,14 2º

Tfno: 961929121

Fax: 961968012

e-mail: vaap02\_val@gva.es

NIG: 46094-41-2-2024-0004632

Procedimiento: **Apelación Autos Instrucción [RAU] Nº 000923/2025- CA -**

*Dimana del Diligencias Previas [DIP] Nº 000692/2024*

*Del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 3 DE CATARROJA*

De: D/ña. Emilio A.T.

Abogado/a Sr/a. BUENO MANZANARES, JOSE MARIA

Procurador/a Sr/a. MATEU GARCIA, ROSARIO

Contra: D/ña. MINISTERIO FISCAL Ilm Sr D CRISTOBAL MELGAREJO, ACCIO CULTURAL DEL PAIS VALENCIA, FETAP-CGT, ASOCIACION DAMNIFICADOS DANA HORT SUD y MAI MÉS VALENCIA

Abogado/a Sr/a. MATA GOMEZ, MANUEL, COMORERA ESTARELLAS, JOAN, VARGAS GONZALEZ, NURIA y BERTOMEU CASTELLO, JOAN

Procurador/a Sr/a. ERANS BALANZA, ENRIQUE, MOLLA SAURI, EVA MARIA, GARCIA GARCIA, JACOBO y DOMINGO MARTINEZ, EVA

#### **AUTO Nº 926/2025**

=====

Ilmos/as. Sres/as.:

#### **Presidente**

D. JOSÉ MANUEL ORTEGA LORENTE

#### **Magistrados/as**

D. JOSÉ ANTONIO MORA ALARCÓN

D. SALVADOR CAMARENA GRAU (ponente)

D. PEDRO ANTONIO CASAS COBO

D. JOSÉ MARÍA GÓMEZ VILLORA

D. ENRIQUE JAVIER ORTOLÁ ICARDO

=====

En Valencia a veinticinco de junio de dos mil veinticinco

## I. HECHOS

**PRIMERO.-** Por el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 3 DE CATARROJA se tramitó Diligencias Previas [DIP] con el numero Nº **000692/2024** por , dictándose en fecha de **10.3.2025 auto**, que fue notificado a las partes, y por el Procurador ROSARIO MATEU GARCIA en nombre y representación **Emilio A.T.** se interpuso contra dicha resolución recurso.

**SEGUNDO.-** Admitida que fue la apelación por el Juzgado de Instrucción, se puso la causa de manifiesto a las demás partes personadas, así como al Ministerio Fiscal (el cual se adhiere al recurso), por un plazo común de cinco días para que pudiesen alegar por escrito dentro de dicho plazo lo que estimasen conveniente y para que presentasen los documentos justificativos de sus pretensiones. Transcurrido dicho plazo, fueron remitidas las actuaciones a esta Audiencia Provincial.

**TERCERO.-** Incoado el presente rollo para la substanciación del recurso de apelación interpuesto, previa su deliberación, fueron entregados los autos al/la Magistrado/a Ponente, D/ña. SALVADOR CAMARENA GRAU, para que expresase el parecer del Tribunal.

Al amparo del artículo 197 de la LOPJ, han formado Sala para la resolución del recurso todos los Magistrados de la Sección.

## II. RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

**PRIMERO.-** El recurrente alega:

*" PRIMERA.- El meritado auto establece que .*

*"Se acuerda la declaración como investigados de Salomé P.T. y Emilio A.T.."-*

*Sin embargo, no se expresa, como sería necesario, los motivos, hechos, indicios, situaciones, omisiones, etc. Imputables a mi cliente de los que quepa entender que debe ser oído como investigado.*

*Nada de ello hace el referido Auto.*

*Por ello, esta parte , al amparo del art. 161 LECrim intentó que se completase el referido Auto, mediante solicitud ad hoc, que sin embargo, fue desestimada por el Juzgado, mediante Auto de fecha veintiuno de marzo de dos mil veinticinco, declarando que "No ha lugar a la solicitud de aclaración interesada por la representación de Emilio A.T..".*

*En el citado Auto de 25/03/25, se establece ad exemplum que "El auto es consecuencia de las declaraciones de familiares y testigos, informes y documentación obrante en la causa en el momento de su dictado. Se detallan algunos, no la totalidad, de los casos. La causa sigue avanzando y se suman, no sólo nuevas declaraciones, sino también nuevas pruebas que confirman la procedencia de lo ya resuelto, la imprescindible citación como investigados de Salomé P.T. y de Emilio A.T.. ", y a renglón seguido se transcriben en el citado auto una serie de manifestaciones de familiares de víctimas, de las que se desprende el dolor y situaciones trágicas que vivieron algunas personas en la DANA de valencia pasada a que se contraen estos autos, pero en absoluto que mi cliente tuviera que ver nada con ello.*

*En las mismas llamadas de víctimas que recoge ssa , se aprecia con claridad diáfana que estas personas llamaban al 112, organismo que depende de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, que según el art. 15.1.a del Decreto 12212017 de 15/09 del Consell, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Agencia, se le asigna la gestión del 112 a la Jefa de Servicios de Coordinación de Emergencias.*

*El 112 NO LLEGO A ENVIAR MENSAJE ALGUNO AL CECOPI EN TODA LA TARDE/NOCHE DEL PASADO 29 DE OCTUBRE DE 2025.*

*Llama poderosamente la atención que no llame como investigado a declarar a la responsable del 112 en aquellos fatídicos días, y sí al Secretario autonómico de Seguridad y Emergencias, que era un miembro mas del CECOPI, organismo donde nunca llegaron, como ya he dicho, las llamadas del 112.*

*La Juzgadora describe con exactitud y rigor el sufrimiento y el daño que sufrieron las víctimas, pero no desarrolla ni un mínimo la responsabilidad en ese daño de mi cliente, y ello es imprescindible en la imputación de un delito.*

*En el Auto recurrido, se hace una relación de comunicaciones acerca de situaciones meteorológicas los días de la pasada gran DANA de Valencia, pero no se expresa que participación pudo tener mi cliente en ellos. Incluso cuando se refiere en el citado Auto al supuesto retraso en el envío de la comunicación pública de aviso por SMS, ¿qué se imputa acerca de eso a mi cliente?, no lo entendemos, porque mi cliente no tenía competencia orgánica o funcional alguna para decidir :*

*Ni si se enviaba o no el mensaje. Ni el contenido del mismo,*

*Ni la hora en que debía enviarse.*

*De hecho en el Auto recurrido lo mas que se dice de mi cliente es que era el número 2 de la Consellería de Justicia, extremo que no es delito de ningún tipo (el Auto expresa que: "Emilio A.T., en su condición de secretario autonómico de seguridad y emergencias y, por tanto, número dos de la consejería de interior en materia de emergencias.").*

*En todo caso, como decimos, ser secretario autonómico y supuesto número dos de una consejería no es un delito, por lo que suponemos que deban ser otras las razones de su citación como imputado, que la Jueza ha obviado en su Auto.*

*Por ello, oro Juzgado, el Juzgado de Instrucción 15 de Valencia, rechazó la imputación de mi defendido (D.P. 2287/24) tras la denuncia llevada a cabo por MANOS LIMPIAS, remitiéndonos a efectos probatorios a los archivos de dicho Juzgado.*

*El referido auto viola, por tanto, gravemente el art. 24 CE y el art. 1 18 LECrim que establece que "toda persona a quien se atribuya un hecho punible podrá ejercitar el derecho de defensa, interviniendo en las actuaciones, desde que se le comunique su existencia, haya sido objeto de detención o de cualquier otra medida cautelar o se haya acordado su procesamiento, a cuyo efecto se le instruirá, sin demora injustificada, de los siguientes derechos:*

*a) Derecho a ser informado de los hechos que se le atribuyan "*

*Pues bien a día de hoy no se nos ha informado de en base a qué se le imputan a mi cliente los hechos presuntamente delictivos a los que se contraen estos autos.*

*Y tampoco se puede extraer los motivos de imputación a mi cliente de los autos, a los que por cierto no hemos tenido acceso hasta el día 20/03/25, en que pudimos empezar a escanearlos, ya que la causa está en papel y no digitalizada, y ello que es una causa que puede afectar a cientos de personas, sino miles.*

*Imputación es «atribuir a una persona, determinada participación criminal en unos concretos hechos que presentan los caracteres de delito o falta» (MORENO CATENA).*

*La comunicación en el auto de imputación de la existencia de unos hechos concretos llevados a cabo (por acción u omisión) por el investigado es objetivamente esencial, pues de lo contrario nos encontraremos ante una inquisitio generalis, que afirmamos existente en los presentes autos, al menos en lo que afecta a mi cliente.*

*Establece nuestra jurisprudencia al respecto, que no hay "inquisitio generalis" allí donde el proceso y la acusación se basan "en una sospecha inicial seria, basada en unos hechos concretos constitutivos de delito grave, y no en una pretendida búsqueda sin más, de posibles hechos que hubiera podido cometer el acusado" (ver STS. 12.1.2006 y STS. 3.12.2002 ), pero por desgracia en los presentes autos, el proceso, en lo tocante a mi cliente, radica en buscar (ya que la Juzgadora no los conoce, lo que deducimos del Auto de imputación)*

*elementos con los que poder acusar a mi cliente, y ello, como decimos, viola abiertamente el art. 24 CE*

*Por ello, y al amparo del art. 238 LOPJ, se debe declarar la nulidad del Auto recurrido, y subsidiariamente se debe revocar el mismo, declarando no haber motivos para llamar a declarar como investigado a mi cliente.*

*SEGUNDA.- En el primer Razonamiento Jurídico del Auto recurrido, se hace una relación no exhaustiva de víctimas mortales de la DANA de Valencia a que se contraen estos autos. Curiosamente no se relacionan todos, sino tan solo unos pocos, la mayoría de los cuales fallecieron por desgracia , en el ámbito territorial de este Juzgado.*

*No entendemos como no se relaciona la totalidad, o al menos si es un dato del que la Juzgadora no dispone en este momento, como no se ha esperado antes de llamar a mi cliente a declarar, a saber las circunstancias de cada uno de los afectados, ya no solo para que mi cliente pueda declarar con unas mínimas garantías, sino también para tener clara la competencia territorial para la instrucción de esta causa.*

*La información que esta parte tiene de esta causa, solo es por la prensa, y la que conoció mi cliente personalmente los fatídicos días de la DANA, en la que en todo momento actuó con una encomiable diligencia en el ejercicio de su cargo. Y de ese conocimiento mi cliente deduce que la mayoría de fallecidos, y los primeros levantamientos de cadáveres, se habrían producido en el ámbito de*

*los Juzgados de Torrent, y no en el de este Juzgado al que tengo el honor de dirigirme.*

*El Auto, tiene pues una grave omisión, por no relacionar como no podía ser de otra manera en un asunto de presuntos homicidios imprudentes, a la totalidad de víctimas, pues para empezar no podemos recurrirlo en cuanto a la competencia del Juzgado (ya que no se nos expresa las circunstancias de la totalidad de víctimas), omisión que nos lleva a solicitar, al amparo del art. 238 LOPJ que se anule el mismo, y subsidiariamente se*

*revoque, de forma que la Juzgadora de Instrucción pueda dictar un auto de imputación donde obren todos los hechos presuntamente delictivos que ya sí se pueden conocer, y solo en ese momento tomar declaración en calidad de investigados a quienes pudieran aparecer posibles responsables de delito*

*.En su virtud,*

*SOLICITO AL JUZGADO, que, teniendo por presentado, en tiempo y forma, este escrito y sus copias, se sirva admitirlo, y a la vista de su contenido, tenga por interpuesto recurso de apelación contra el Auto de 10/03/25, de forma que el mismo sea anulado, y subsidiariamente revocado, declarando no haber motivos para llamar a declarar como investigado a mi cliente, y ordenando al Juzgado de Instrucción que se determine la totalidad de posibles víctimas antes de llamar a declarar a los posibles investigados."*

El MF se adhiere reproduciendo el razonamiento séptimo del ATS Secc 1 de 18.12.2020, indicando que la imputación no es compatible con el principio de culpabilidad, sin perjuicio del resultado de las diligencias que ha solicitado.

Acció Cultural del País Valencià solicita la confirmación del auto recurrido.

También solicita la confirmación FETAP-CGT:

**"PRIMERA-. EXISTENCIA DE INDICIOS SUFICIENTES PARA RECIBIR DECLARACIÓN EN CALIDAD DE INVESTIGADO AL SR. Emilio A.T.**

*Se alega en primer lugar que el Auto recurrido no establece los motivos, hechos, indicios, situaciones, omisiones, etc. imputables al Sr. Emilio A.T. de los que quepa entender que debe ser oído como investigado.*

*En su escrito de recurso da a entender que el Sr. Emilio A.T. no tuvo ninguna intervención por acción u omisión en las decisiones o la falta de las mismas como número dos de la Conselleria de interior y en materia de emergencias y de Secretario Autonómico de Seguridad y Emergencias. Evidentemente el hecho de ser llamado como investigado no resulta simplemente por el hecho de ostentar dichos cargos.*

*Pero no se puede obviar que el Sr. Emilio A.T. como responsable de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta de las Emergencias (AVSRE) era el encargado de gestionar el Centro de Coordinación de Emergencias, según la Ley 4/2017, de 3 de febrero, por la que se crea la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias.*

*En su artículo 11 dicha ley establece las atribuciones de la persona titular de la Dirección de la AVSRE, entre otras:*

*b) Asumir la máxima responsabilidad del funcionamiento de los servicios que integran la AVSRE, ejerciendo la dirección, gestión, inspección y organización interna de la totalidad de las actividades, órganos, centros, equipos e instalaciones de la AVSRE, impartiendo para ello las correspondientes instrucciones.*

*c) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos del Consejo de Dirección de la AVSRE*

*s) Adoptar las resoluciones y actuaciones que por motivos de urgencia sean necesarias, que deberán someterse a la ratificación del Consejo de Dirección, de acuerdo con lo previsto en el apartado 2.h del artículo 7.»*

*Es decir, que la ley si le otorgaba una serie de funciones ejecutivas por lo que la alegación de ausencia de competencia orgánica o funcional no se sostiene.*

*Sorprende además que se diga para justificar su ausencia de responsabilidad que el 112 no envió comunicación alguna al CECOPI, cuando una de las funciones del Centro de Coordinación de Emergencias, según el Plan Especial de Inundaciones de la Generalitat Valenciana es coordinar las actuaciones del teléfono 112 frente al riesgo de inundaciones.*

*Añadiendo el citado Plan que el Centro de Coordinación de la Generalitat seguirá efectuando la labor de coordinación de las comunicaciones y el seguimiento de la situación de emergencia, con independencia de que el CECOPI esté constituido o no en sus instalaciones. Queda claro por su alegación, si es cierta, que esa coordinación que le correspondía no existió.*

*Que no se haya llamado a declarar como investigada a la responsable del 112 en el estado incipiente todavía de la investigación no es óbice para que se acuerde la citación como investigado del recurrente, sin perjuicio de lo que resulte de las diligencias acordadas por el Juzgado instructor y, especialmente de la propia declaración del recurrente.*

No existe por tanto ninguna violación del artículo 24 de la Constitución ni del artículo 118 LECrim.

**SEGUNDA-. SOBRE LA RELACIÓN EXHAUSTIVA DE LOS FALLECIDOS Y LA COMPETENCIA TERRITORIAL DEL JUZGADO DE CATARROJA.**

*Se alega asimismo por la representación procesal de Emilio A.T. que el Auto recurrido no expresa la totalidad de las víctimas y las circunstancias de cada una de ellas y, por tanto no puede determinarse la competencia territorial del Juzgado.*

*Como tiene señalada la jurisprudencia del Tribunal Supremo, ni el atestado, ni la denuncia, ni la querella, como medios de iniciación del proceso penal. ofrecen una imagen fija del desenlace jurisdiccional de la fase de investigación. Lo contrario sería inasumible desde la perspectiva de los principios que informan el proceso penal. El sumario, en el procedimiento ordinario, y las diligencias previas, en el procedimiento abreviado, tienen por objeto la práctica de los actos de investigación indispensables para determinar la naturaleza del hecho y la identidad de las personas responsables. Es evidente, por tanto, que en el inicio del proceso penal la delimitación objetiva -también la subjetiva- se presenta con una nitidez que no siempre es definitiva.*

*No apreciamos que la ausencia de la totalidad de la relación de presuntos homicidios y lesiones imprudentes suponga ninguna indefensión para el recurrente.*

*Respecto a la competencia territorial, tal y como ha ido informando el Ministerio Fiscal en las múltiples Diligencias Previas que se han ido incoando e inhibiendo, el Juzgado de Catarroja fue uno de los primeros en incoarlas y se encontraba en un estadio procesal más avanzado, por lo que se determinó la conveniencia de continuar con su tramitación sin producir dilaciones innecesarias a fin de facilitar el avance de la investigación.*

*En su virtud,*

*SUPlico AL JUZGADO, que teniendo por presentado este escrito, lo una a las actuaciones de su razón y tenga por presentado el escrito de oposición e impugnación del recurso de apelación planteado por la representación procesal de DON Emilio A.T., solicitando se dicte nuevo Auto confirmando..."*

*La Asociación Damnificados Dana Hort Sud se opone al recurso:*

*"PRIMERO. - DE LA EXISTENCIA DE INDICIOS DE CRIMINALIDAD*

*SUFICIENTES PARA JUSTIFICAR LA IMPUTACIÓN*

*Don Emilio A.T., en su condición de secretario autonómico de seguridad y emergencias de la Comunidad Valenciana y consecuentemente, responsable de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta de las Emergencias (AVSRE), no tomó decisión alguna, hasta la conocida alerta tardía del sistema ESALERT de las 20: 11 h, lo cual supone una omisión/ tardanza, más que injustificada puesto que era su deber y disponía de numerosa información sobre lo ocurrido, ya sea a través de medios de comunicación de APUNT, comunicaciones de la AEMET, avisos de la CHJ, hasta publicaciones de texto y videos de las redes sociales del propio servicio de 112 de la Comunitat Valenciana se estaba informando sobre la dramática situación que se vivía desde por la mañana en algunas poblaciones de la provincia de Valencia.*

*El artículo 11 de la Ley 4/2017, de 3 de febrero, por la que se crea la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, establece que la persona titular de la Dirección de la AVSRE ostenta funciones ejecutivas. En este sentido, al Sr. Emilio A.T. se le atribuye la máxima responsabilidad sobre el funcionamiento de los servicios que integran la Agencia, la ejecución y cumplimiento de los acuerdos adoptados por su Consejo de Dirección, así como la adopción de resoluciones y actuaciones urgentes cuando sean necesarias. No siendo por lo tanto una investigación que se desarrolle por ser "el número dos de la consejería de interior, como se refiere de contrario, sino porque el Sr. Emilio A.T. tiene entre sus funciones atribuidas la adopción de actuaciones urgentes en materia de Emergencias, siendo que no adoptó actuación urgente alguna.*

*Se afirma por la representación del Sr. Emilio A.T. que "el 112 no llegó a enviar mensaje alguno al CECOPI en toda la tarde/ noche del pasado 29 de octubre de 2025'.*

*Lo cierto es que entre las funciones del Sr. Emilio A.T., en la condición indicada anteriormente, según el Plan Especial de Inundaciones de la Generalitat Valenciana, se encuentra la de "coordinar las actuaciones del teléfono 1 • 1 • 2 Comunitat Valenciana frente al riesgo de inundaciones".*

*Partiendo de ese deber de coordinación, resulta obvio que tenía la obligación de seguir la evolución de la situación de emergencia y en caso de no disponer de información actualizada, poseía medios más que suficientes para tratar de conseguirla. Siendo tan simple como encender la radio o hacer unas llamadas.*

*Por ello, a raíz de la afirmación que la representación procesal de D. Emilio A.T. ha realizado sobre la inexistencia de mensaje alguno entre el 112 y el CECOPI, esta parte echa en falta que se acredite, cuanto menos, un intento de contactar por parte del Sr. Emilio A.T. con las personas responsables del 112 para tratar de informarse ante la inminencia y gravedad de los hechos. La comunicación no confluyó en ninguno de los sentidos, a pesar de tener ambos competencia para ello.*



Ahora bien, no se puede alegar desconocimiento de la situación en tanto es por todos sabido que la AEMET realizó numerosos avisos oficiales sobre las precipitaciones que fueron evolucionando en gravedad conforme avanzaba el día, al igual que existieron avisos los días previos a la tragedia.

Resulta muy representativa de la suficiencia de la información disponible, el hecho de que la rectora la Universidad de Valencia, a instancia de las propuestas del Comité de Emergencias UV y con la información pública que generan las instituciones competentes en materia de objeto de emergencia, tomase la decisión de cancelar las clases.

Es más, en el informe obrante en Autos de la referida Universidad, se pone de manifiesto que la Universidad de Valencia "no dispuso de más información de la que podría disponer cualquier institución que se mantuviese atenta a los avisos e informaciones de los organismos públicos (AEMET Y S+EM de la Generalitat Valenciana). Y tomó sus decisiones después de analizar esas informaciones". Es decir, a pesar de partir de la misma información, no tomaron decisión alguna para poner en aviso a la población y tomar las medidas adecuadas.

Todo ello es una muestra clara de que el Sr. Emilio A.T., como ya hemos tenido oportunidad de demostrar en numerosas ocasiones, tenía información y potestad más que suficiente para tomar las medidas necesarias para proteger a la población en un momento mucho anterior en el que se podrían haber salvado muchas vidas, ya que si alguien tenía fácil conseguir la información en materia de emergencias era el Sr. Emilio A.T., entre otros.

En cuanto a la no investigación de la responsable del 112 el día 29 de octubre de 2024, recordar a la representación del Sr. Emilio A.T. que estando abierta la fase de instrucción, nos encontramos en un momento procesal cuya finalidad es buscar indicios de criminalidad a través de la solicitud de diligencias de investigación. Por ello, puesto que a lo largo de esta fase se irán descubriendo nuevos indicios, el listado de los que finalmente pudieran resultar imputados para la apertura de la fase intermedia, todavía no está cerrada.

#### SEGUNDO. - DE LA RELACIÓN EXHAUSTIVA DE FALLECIDOS REALIZADA

POR EL AUTO DE 10 DE MAYO DE 2025.

Bien es cierto que el Auto de 10 de marzo de 2025, contiene un error meramente material en cuanto al nombramiento de los fallecidos. Siendo que numerosas partes, entre las que se encuentra esta representación procesal, ha presentado escrito de aclaración/ recurso de reforma con el objeto de rectificar los nombres que no aparecían en el listado.

Ahora bien, el número total de fallecidos, esto son 225 personas, es correcto. Entendiendo esta parte que al ser un número tan elevado es más que justificado que se trate de un mero error material y no por "no disponer del dato", como se intenta alegar por la representación del Sr. Emilio A.T..

Aun así, esta representación procesal no considera que suponga perjuicio alguno, ni indefensión, no conocer en este momento procesal la relación exhaustiva de fallecidos y/o lesiones imprudentes. Siendo que, el objeto de investigación en el presente procedimiento y, por ende, en el sentido en el que irá dirigida la declaración, es sobre la responsabilidad propia en la toma de declaraciones, no sobre su implicación en cada uno de los fallecimientos y/o lesiones, ya que no ha sido testigo directo del mismo.

#### TERCERO. - DE LA COMPETENCIA TERRITORIAL DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS PREVIAS.

También se alega de contrario que, el hecho de no mencionar el Auto la totalidad de las víctimas impide a la representación del Sr. Emilio A.T. recurrir la competencia del Juzgado. Ahora bien, esta parte viene a manifestar que ha quedado acreditado en numerosas ocasiones que el presente juzgado fue uno de los primeros en incoar diligencias previas y puesto que se encontraba en un estadio procesal más avanzado, se acordó la inhibición del resto de procedimientos llevados a cabo ante numerosos juzgados, a favor del presente.

Por lo expuesto,

SUPLICO AL JUZGADO, que teniendo por presentado este escrito y previos los trámites procesales oportunos, se tenga por FORMULADO ESCRITO DE OPOSICIÓN ANTE EL RECURSO DE APELACIÓN presentado por la representación procesal del Sr. Emilio A.T. y previos los trámites procesales oportunos eleve la causa ante la Ilustrísima Audiencia Provincial, ante la que comparezco y

SUPLICO A LA ILUSTRÍSIMA AUDIENCIA PROVINCIAL DE VALENCIA dicte resolución por la que acuerde la confirmación del Auto de 10 de marzo de 2025 en el sentido de mantener la condición de investigado de D. Emilio A.T.."

MAI MÉS VALÈNCIA se opone al recurso:

"PRIMER: Resposta al recurs de l'investigat Emilio A.T..

*El recurs de l'investigat es centra en denunciar una suposada falta de motivació en quan als indicis incriminatoris que determinen la imputació del seu representat i la conducta típica que indiciàriament se li atribueix en la resolució recorreguda. També com una suposada falta de la descripció de les circumstàncies en que es produïren les morts d'aquell dia atribuïdes indiciàriament a la seua omissió imprudent i actuació negligent.*

*A) En quant a la suposada absència d'indicis incriminatoris denunciada, el recurs de l'apel·lant no aconsegueix fer més que una impugnació genèrica de la resolució recorreguda, ja que la interlocutòria explica amb claredat els fets objecte d'investigació (morts del 142 BIS CP i lesions del 152 BIS a causa de les inundacions produïdes per la DANA), la causalitat d'aquestes en la inacció omisiva de l'art. II CP (absència d'avisos a la població, retards en convocar el CECOPI i en enviar el missatge a través del sistema Es-Alert) o acció negligent (contingut inadequat del missatge) de la Conselleria responsable a pesar de la informació prèvia de la que es disposava que era plural i abundant, que va motivar conductes diligents d'altres institucions com la Universitat de València.*

*El Tribunal Suprem en la Sentència 805/2017.....*

*En concordància amb aquest criteri jurisprudencial, el F.J.6é de la resolució recorreguda deixa clar que la investigació per la responsabilitat s'ha d'enfocar a determinar les causes de la conducta omisiva (absència d'avisos durant la jornada i retard en l'enviament del missatge del sistema ES-Alert) i negligent (contingut erroni i incomplet del missatge) en que ha pogut incórrer l'administració competent que exercia el mando únic en l'àmbit de la seguretat i les emergències.*

*En primer lloc, la Interlocutòria de 10/03 estableix amb claredat suficient que l'administració competent en la presa de decisions era la Conselleria d'Interior per a la que l'investigat exercia el càrrec de més rang en la matèria, en concret el de Secretari Autonòmic de Seguretat i Emergències.*

*L'atribució normativa de la responsabilitat a nivell competencial a l'àrea que l'investigat dirigia queda apuntalada en la resolució recorreguda explicant-se amb claredat els preceptes de l'Estatut d'autonomia i de la Llei 13/2010 de 23 de Novembre de Protecció Civil i Gestió d'Emergències, que fonamenten jurídicament la necessitat d'investigar l'actuació de l'investigat i la seua participació en la presa de decisions en la matèria de la que era el màxim responsable aquell 29 d'Octubre.*

*En la mateixa línia, la interlocutòria enumera suficientment en els fonaments 5é, 7é, 8é, 9é i 10é els mitjans pels quals es tenia o s'havia de tindre informació suficient per part de l'administració competent en matèria de seguretat i gestió d'emergències, dels efectes que podia causar i que estava causant la DANA en la jornada del 29 d'octubre. Justificant-se aquesta constatació en la prova documental i testifical que ha examinat la instructora i que queda reflexada en la resolució recorreguda.*

*A més, la interlocutòria fa referència als precedents històrics d'inundacions semblants que ha patit la Comunitat Valenciana i que s'haurien d'haver valorat conjuntament amb l'abundant informació de la que es disposava per part dels responsables públics competents a l'hora d'actuar davant d'uns fets tan devastadors.*

*Per tant, resulta absolutament raonable, lògica i suficient l'explicació que hi ha en la interlocutòria apel·lada per justificar que el Sr. Emilio A.T. tinga que declarar com a investigat en aquesta fase inicial de la instrucció, sense perjudici del que puga manifestar en la seua defensa respecte a la seua actuació concreta o el seu coneixement personal, amb lectura dels seus drets tal i com exigeix el 118 LECrim. Per tant no hi ha ninguna vulneració de l'art. 24 CE com pretén l'investigat i el recurs s'ha de desestimar.*

*B) En quan a la suposada omissió de les circumstàncies de la mort de cada víctima o de totes les víctimes, entenem que aquesta petició va ser objecte d'aclariment per part del jutjat d'instrucció en resolució de 21/03/2025 a instància de l'investigat, tenint una resposta suficientment motivada, sense tindre cap fonament l'argument de que la resolució és insuficient en quan a la descripció dels fets i de les circumstàncies de la mort de cada una de les víctimes.*

*En aquest sentit, les morts i les lesions patides estan suficientment identificades i explicades en la resolució recorreguda, així com també l'abundant informació de la que disposava el departament dirigit per l'investigat, que fa inexplicable el retard en la convocatòria del CECOPI, en l'emissió del missatge ES-Alert, així com el seu contingut incomplet i erroni.*

*Per tant, el recurs d'apel·lació d'Emilio A.T. ha de ser desestimat també en el seu motiu segon...."*

**SEGUNDO.-** En essència, el recurrente se queja de que:

1.- El auto no indica indicios que puedan serle atribuidos y que justifiquen su llamada a declarar como investigado. También hace mención a que, respecto del 112, que depende de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, la gestión está asignada a la Jefa de Servicios de Coordinación de Emergencias, añadiendo que no tenía ninguna competencia ni orgánica ni funcional para decidir, siendo

insuficiente indicio ser Secretario Autonómico de Seguridad y Emergencias y, por tanto, número dos de la Conselleria.

2.- Si se le atribuyen todas las muertes se deberían indicar las circunstancias de esas muertes (señalando que los primeros levantamientos de cadáveres se habrían producido en el ámbito de los juzgados de Torrent).

Y, lo que nos solicita es:

*"...que, teniendo por presentado, en tiempo y forma, este escrito y sus copias, se sirva admitirlo, y a la vista de su contenido, tenga por interpuesto recurso de apelación contra el Auto de 10/03/25, de forma que el mismo sea anulado, y subsidiariamente revocado, declarando no haber motivos para llamar a declarar como investigado a mi cliente, y ordenando al Juzgado de Instrucción que se determine la totalidad de posibles víctimas antes de llamar a declarar a los posibles investigados"*

Delimitado el objeto devolutivo y vistas las peticiones del recurrente debemos efectuar unas precisiones iniciales:

1.- El nivel de suficiencia de los elementos incriminatorios exigibles en las resoluciones judiciales varía según las distintas fases del proceso.

El umbral de suficiencia probatoria para adoptar una decisión es diferente según la fase del proceso penal en que nos hallemos. No solo eso, dentro de la misma fase ese umbral será distinto según la naturaleza de la decisión que se vaya a adoptar (por ejemplo, como regla general, no se requiere el mismo nivel de suficiencia indiciaria para adoptar la decisión que aquí se examina que una medida cautelar que suponga una grave restricción de un derecho fundamental).

Desde esta perspectiva, puede decirse que, cuando más cerca se está del momento inicial del proceso, más bajo es el nivel de suficiencia exigido, y que ese nivel se va elevando progresivamente conforme se avanza en el mismo.

La llamada a declarar como investigado, debe situarse en ese momento inicial.

2.- Es cierto que, también como regla general, se deben administrar de forma responsable y razonable las reglas de imputación, sin embargo, también se debe posibilitar la investigación, y, no es irrazonable llamar como investigado a una persona si, el Juez o Jueza, estima que las preguntas que se le efectuarán van a ser relativas a su posible participación en el hecho delictivo que se está investigando.

### **TERCERO.-**

3.1- Posición del recurrente.

En un auto previo (número 737/25, ARI 655/2025 de 19.5.2025) ya señalamos:

a.- Respecto de los funcionarios públicos, según su posición dentro del sistema administrativo, se podrían distinguir dos planos de actuación. Un plano interno, que tiene que ver con deberes institucionales (aunque las instituciones no sean en su misma fines, sino que se hallan al servicio de la sociedad) y otro externo, de protección directa de bienes jurídicos de personas o la sociedad (de donde -al menos como regla general- puede surgir la posición de garante).

b.- En la legislación española se exige que la omisión, para que se pueda afirmar que es una ejecución del tipo de la parte especial del código penal *"equivalga, según el sentido del texto de la ley, a su causación"*, sea como autor o participe (STS 1538/2000 de 9.10), por tanto, también puede participar en el hecho de la Sra. Salomé P.T..

Respecto de lo que hemos señalado en el apartado a), no se discute en los escritos que el recurrente, en el momento de los hechos investigados, era Secretario Autonómico de Emergencias de la Conselleria de Justicia e Interior y que fue convocado al CECOPI.

El recurrente hace mención a la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, y en las impugnaciones al recurso se hace mención a que el recurrente es el Director.

De ese modo, el recurso indica que el art Artículo 15 del Decreto 122/2017, de 15 de septiembre, del Consell, por el que aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias indica que *"...De la Subdirección General de Emergencias dependen los siguientes servicios:1. Servicio de Coordinación de Emergencias, al que se le asignan las siguientes funciones: a) Gestión de la Sala de Emergencias de la Generalitat para el cumplimiento de las funciones asignadas en la Ley 13/2010, de 23 de noviembre, de la Generalitat, de protección civil y gestión de emergencias, tanto en situación ordinaria como en situación de emergencia.."*



Ahora bien, ello no implica que el recurrente sea ajeno a dicha actividad, pues el art 14 de dicho Decreto señala que : *"...1. La Subdirección General de Emergencias bajo la supervisión de la persona titular de la AVSRE, tiene atribuida la coordinación de los servicios y unidades adscritas a ella, la coordinación externa con otras administraciones públicas, así como la representación de la AVSRE en las tareas que se le encomienden..."* (el subrayado es nuestro)

Debe tenerse en cuenta que en la disposición adicional primera del Decreto 112/2023, de 25 de julio, del Consell, por el que establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las Consellerias de la Generalitat se recoge que *"...Todas las referencias a la dirección general con competencias en materia de seguridad y respuesta a las emergencias, contenidas en la Ley 4/2017, de 3 de febrero, por la cual se crea la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, en el Decreto 122/2018, de 15 de septiembre, del Consell, por el que se aprueba el reglamento orgánico y funcional de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, o en otra normativa sobre esta materia, se deben entender realizadas a la Secretaría Autonómica con competencias en materia de seguridad y respuesta a las emergencias"* (el subrayado es nuestro)

Y la Ley 4/2017, de 3 de febrero, de la Generalitat, por la que se crea la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias señala en su art 10 que *"La persona titular de la secretaría autonómica con competencias en materia de seguridad y respuesta a las emergencias ostentará la dirección de la AVSRE"* (el artículo 10 es modificado por el artículo 101 de la Ley 9/2019, de 23 de diciembre), mientras que el art 11 indica que *"... 2. Corresponden a la persona titular de la Dirección de la AVSRE las siguientes atribuciones:...*

*b) La responsabilidad ordinaria del funcionamiento de los servicios que integren la AVSRE, ejecutando y haciendo cumplir las instrucciones de la presidencia respecto a la gestión, inspección y organización interna de la totalidad de las actividades, órganos, centros, equipos e instalaciones de la AVSRE.*

*c) Ejercer la jefatura del personal adscrito a la AVSRE, gestionando de forma integrada los recursos humanos, materiales y económicos, a fin de prestar unos servicios eficientes y de calidad....*

*n) Adoptar las resoluciones y actuaciones que por motivos de urgencia sean necesarias, que deberán someterse a la ratificación del Consejo de Dirección, de acuerdo con lo previsto en el apartado 2.h del artículo 7."*

El artículo 12 de dicha Ley recoge que *"...La Presidencia y la Dirección de la AVSRE podrán delegar el ejercicio de alguna de sus atribuciones en otros órganos de conformidad con lo que se establece en la legislación vigente"*, algo que en el recurso no se dice que haya sucedido.

Por tanto, entendemos que no estaríamos en el supuesto señalado por el MF, y, que, no es irrazonable ni arbitraria a partir de lo expuesto (teniendo en cuenta cual es el objeto de la investigación), la decisión de la Jueza de tomar declaración como investigado al recurrente.

Ello sin perjuicio de que la posición de garantía no es una "foto fija", sino que debe encuadrarse en el marco del proceso decisorio objeto de investigación y, por lo tanto, se deberá estar a su resultado.

3.2.- Tampoco es necesario para esa toma de declaración la determinación de la totalidad de las muertes objeto de la investigación.

Por ello deben rechazarse las alegaciones del recurso sobre esta materia.

En cualquier caso, como regla general, si bien hay que tener en cuenta la fase procesal en la que nos encontramos, la investigación no debe limitarse a identificar que se ha infringido un deber especial y relatar un conjunto de fallecimientos, sino que debe verificarse si es posible establecer (más allá de cualquier duda razonable) respecto de cada resultado que se pretenda atribuir, que la ejecución de la conducta (cuya omisión se atribuye) habría interrumpido el nexo causal y que, de ese modo, éste no se habría producido.

En ese sentido el ATS (recurso 20542/2020) de 18/12/2020 (al que hacemos referencia, entre otros, en nuestro auto 888/2025 ARI número 1184 de 17.6.2025) señala que:

*"...Una primera idea, que opera como irrenunciable presupuesto de cualquier análisis jurídico-penal, exige tener bien presente que la responsabilidad penal por las muertes acaecidas o por las graves lesiones sufridas por algunos de los enfermos impone demostrar que entre las acciones u omisiones -infracción del deber- y el resultado mortal o lesivo existió una concreta y precisa relación de causalidad. No es posible acusar a alguien de ser autor de un homicidio o unas lesiones graves si entre su acción u omisión y el resultado mortal o lesivo no puede afirmarse una inequívoca relación de causalidad. Pero esta relación de causalidad no puede construirse en términos genéricos, difusos, de suerte que el análisis individual y la prueba concreta de cada uno de los contagios se sustituya por una confusa referencia a fallecimientos acaecidos en grupos sociales o en colectivos de personas que, por una u otra circunstancia, estuvieron muy cerca de una acreditada fuente de contagio...."*

### **III. PARTE DISPOSITIVA**

En atención a todo lo expuesto, la Sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia,

**ha decidido:**

**PRIMERO:** DESESTIMAR el recurso de apelación interpuesto por el Procurador ROSARIO MATEU GARCIA en nombre y representación **Emilio A.T..**

**SEGUNDO:** CONFIRMAR la resolución a que se contrae el presente recurso.

Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal y demás partes, haciéndose saber que contra la misma no cabe ulterior recurso.

Únase testimonio de esta resolución a los autos de su razón y al rollo de Sala.

Así lo acuerda este Tribunal, firmando los/as Magistrados/as más arriba expresados.